



Aislados socialmente, cercados por la violencia

El periodo de aislamiento por el COVID-19 pasará a la historia como la sumatoria de los días con niveles más altos de violencia hacia las personas LGBTI

Es recurrente que organizaciones sociales se especialicen, por la ausencia de información oficial, en documentar violencia contra las personas por prejuicios relacionados con su orientación sexual, identidad o expresión de género. Este ejercicio es altamente significativo en Colombia, por la falta de compromiso del Estado y la ausencia de datos que permitan identificar los tipos de violencia de las que son víctimas las personas LGBTI y sus motivaciones, no solo con el fin de investigarlas y sancionarlas, sino también prevenirlas y erradicarlas.

Homicidios, feminicidios, violencia policial, amenazas y discriminación en el sistema de salud, en los ambientes escolares y espacios laborales, son situaciones dolorosas y desproporcionadas, que, gracias a las voces de activistas, colectivas y organizaciones LGBTI, hemos podido conocer, ponerles nombre y darles un rostro en narrativas que dan cuenta de los fuertes impactos de dichas violencias. Todo esto permite comprender que bajo la estructura de estas prácticas que llamamos “prejuiciosas”, se valida un comportamiento social que naturaliza, e incluso en ocasiones, avala la negación de derechos a las personas LGBTI, frente a un Estado indolente que olvida ser garante de derechos ante la solicitud del reconocimiento de ciudadanía plena.

Lo sucedido con Luis, el joven gay sincelejano que perdió su brazo, luego de un ataque propiciado por otro menor de edad, vecino suyo, hijo de una amiga de su mamá, deja en evidencia este sistema pandémico de violencia prejuiciosa en Colombia, naturalizada en la vida cotidiana de nuestras ciudades y campos, y que responde a una falta estructural de cultura ciudadana y a la ausencia intencional del Estado para proteger sus derechos. Tanto así es el asunto que el silencio del Estado ha sido notorio, no solo para investigar y sancionar estos hechos, sino que algunas de sus instituciones, por su falta de acción, terminan siendo responsables que ocurran o, peor aún, son sus integrantes quienes la ejecutan.

Lo anterior se puede observar con casos concretos, como los que vienen ocurriendo en estos días de aislamiento con el comportamiento violento de la Policía Nacional, la misma que no respondió oportunamente a los llamados de auxilio de la mamá de Luis, que agredió a un grupo de mujeres trans desde una patrulla en Bogotá, que propinó una golpiza en el metro de Medellín a una mujer trans, que prohibió la circulación de una mujer trans en Cartagena en el día de su “pico y género” por un acto discrecional de un uniformado que creyó que su “apariencia personal, no coincidía con la feminidad”, y que es presuntamente responsable de la muerte violenta de Juan dentro de la estación de Policía en Arboletes, en el Urabá antioqueño.

Al iniciar el aislamiento preventivo, el gobierno nacional nos mandó a refugiarnos a las casas, pasando por alto que muchas no tienen casa o que su hogar es foco de violencia, con el compromiso de que protegería los derechos y garantizaría el bienestar de la gente. Sin embargo, cinco meses después no ha garantizado esta tarea misional que le asiste y tampoco ha respondido a las demandas históricas de las personas LGBTI que están en alto riesgo de inseguridad alimentaria, en

www.caribeafirmativo.lgbt

info@caribeafirmativo.lgbt / caribeafirmativo@gmail.com

Barranquilla - Cartagena, Colombia.

[@caribeafirmativ](https://twitter.com/caribeafirmativ)

[f Caribe Afirmativo](https://www.facebook.com/CaribeAfirmativo)



situación de calle y a quienes el aislamiento les ha aumentado los niveles de vulnerabilidad frente a la violencia. Además, ha olvidado la atención especial en materia de salud que, en estos días coyunturales, debe ofrecer a la ciudadanía migrante, adultos mayores, trabajadoras sexuales y personas que viven con VIH, muchas de ellas LGBTI, a quienes esta situación les ha significado mayor precariedad en sus condiciones de vida y les ha recordado lo invisibles que son para el Estado.

Así, en este año: la violencia física, verbal y simbólica contra las personas LGBTI está en aumento, con más de 35 homicidios y feminicidios a 12 de agosto; los prejuicios de muchos funcionarios públicos en declaraciones públicas en Cali y Tumaco, han resonado en los medios de comunicación; y la violencia policial se ha recrudecido hacia las personas trans en varios lugares del país. Lo ocurrido no es resultado de la pandemia, pero esta ha permitido retirar el velo que los ocultaba y pormenorizaba: muertes violentas, amenazas, intentos de suicidio, ciudadanía muriendo en las calles por ausencia de atención médica, matoneo escolar, ambientes laborales nocivos y prácticas sistemáticas de violencia institucional, dan cuenta que estamos ante un Estado prejuicioso y que nuestra cultura ciudadana sigue viendo la diversidad como un problema social.

Adicionalmente, los días pandémicos han arrojado un dato importante, ¿quiénes sufren mayoritariamente esta violencia? Las personas que dentro de la población LGBTI, por las prácticas de asimetría, exclusión, patriarcado y pobreza, reciben con mayor desproporción estos efectos en su vida: las mujeres trans, migrantes y refugiadas, y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y los adultos mayores. Esta situación llama la atención no solo de que se requiere una intervención en materia de derechos humanos con urgencia, sino que la actuación de gobiernos y sociedad debe ser con enfoque diferencial, prestando atención en materia territorial a las comunidades barriales y rurales; y en términos poblacionales, enfocando las acciones con personas trans, menores de edad, personas adultas mayores y migrantes que, por su orientación sexual, identidad o expresión de género, sufren los impactos más desproporcionados de estas prácticas violentas y excluyentes.

Esperamos que se acerque el fin del ciclo de aislamiento y nos encontramos preparando estrategias para construir la nueva normalidad, pero no solo debe ser, planeando la reactivación económica, la creación de nuevas fuentes de trabajo y la masificación de la conectividad, sino y, sobre todo, proponer, qué tipo de cultura ciudadana tenemos que afincar y cual será la ciudadanía poscovid, para que no nos veamos obligados retornar a una sociedad excluyentes y patológica. De esta manera, urge hacer una fuerte reforma estructural en términos de formación, transformación e inversión en la cultura ciudadana, en las familias, escuelas de padres, grupos vecinales, acciones comunales y veredales, en los clubes deportivos, establecimientos educativos y sitios de recreación, para construir unas prácticas comunitarias cimentadas en la diversidad como un valor social, y el reconocimiento a la dignidad como un principio inviolable, a través de acciones de renovación cultural y compromiso institucional que pongan fin a los prejuicios que le quitaron la vida a Juan, a Luis su brazo y que persiguen constantemente a las personas trans vestidos de fuerza pública.

Wilson Castañeda Castro

Director, Caribe Afirmativo

www.caribeafirmativo.lgbt

info@caribeafirmativo.lgbt / caribeafirmativo@gmail.com

Barranquilla - Cartagena, Colombia.

[@caribeafirmativ](https://twitter.com/caribeafirmativ)

[f Caribe Afirmativo](https://www.facebook.com/CaribeAfirmativo)